

Historia

1983 | 2003: 20 años de democracia

A dos décadas de la restauración de la democracia, una edición especial para evocar el hito histórico de 1983 y comprender los difíciles veinte años que han transcurrido desde entonces. Escriben: Félix Luna, Guy Sorman, Marcos Aguinis, Beatriz Sarlo, Bartolomé de Vedia, Joaquín Morales Solá, Robert Potash, Rosendo Fraga, Estela de Carlotto, Héctor Ríos Ereñú, Carlota Jackisch, Adrián Ventura y Pablo Mendelevich

Hace 20 años, una convulsión positiva abrazaba a la Argentina. El domingo 30 de octubre de 1983 se consumó la restauración democrática con la elección de Raúl Alfonsín como el primer presidente civil después de la más cruenta y sangrienta experiencia militar del siglo pasado. La Argentina sigue siendo ahora, dos décadas después, uno de los países latinoamericanos más apegados al sistema democrático, según la última encuesta de las Naciones Unidas en la región.

¿La democracia ha hecho sus deberes en estos años? ¿El Estado ha cumplido su papel de árbitro de los conflictos sociales? ¿La sociedad tiene razones para estar conforme con su sistema político? Antes de entrar en ese debate, es necesario repetir lo que es irrefutable: ningún método político sustitutivo es mejor que la democracia misma, aun cuando los hombres que la expresan -y la expresaron- no la merezcan.

Si algo quedó claro en la volátil Navidad del año 2001, cuando un presidente se fue en la mitad de su mandato y la economía se derrumbó sobre las espaldas de los argentinos, es que ya no había sociedad, ni militares, ni situación internacional propicios para cambiar la democracia por una nueva aventura uniformada. Con argumentos infinitamente menores, en el pasado muchos presidentes civiles habían volado de la Casa Rosada y los tanques del Ejército se habían hecho cargo de los problemas nacionales.

Una primera pregunta que vale la pena hacerse es si la Constitución, el único contrato unánime de la sociedad argentina, fue respetada en estos años. La respuesta no puede ser afirmativa, sobre todo si se tiene en cuenta que la destrucción de la economía fue una consecuencia -y no una causa- de la devastación previa de todas las instituciones nacionales. Sin Poder Judicial creíble, sin Congreso respetado, sin moneda y, por último, sin institución presidencial, sólo un prodigio improbable hubiera salvado a la economía del contagio seguro.

Ningún presidente de la democracia se fue cuando debió irse. Alfonsín salió disparado por la onda expansiva de la hiperinflación seis meses antes de concluir su período. El presidente que lo sucedió, Carlos Menem, se quedó cuatro años más, tras forzar una reforma de la Constitución que

calzaba perfectamente con su proyecto político de perpetuación. Fernando de la Rúa alcanzó apenas a cumplir el 50 por ciento de su mandato.

El único que se fue cuando quiso (y luego de obturar el regreso de Menem, su propuesta más ambiciosa) fue un presidente provisional, Eduardo Duhalde. Otra extrañeza de la política argentina: Duhalde fue también el único presidente que se fue mejor que como llegó, aunque llegó muy mal. Era, al mismo tiempo, el único al que una mayoría de la sociedad argentina le había dicho, en 1999, que no lo quería ver en la jefatura del Estado.

Tales contorsiones en el teatro de la política habían sido precedidas por otros métodos y por otros códigos, que fueron carcomiendo los cimientos de todas las instituciones. El trapicheo entre peronistas y radicales para reconstruir la justicia comenzó en los años 80 con negociaciones secretas entre Alfonsín y el senador peronista Vicente Leónidas Saadi, que se había reservado la estratégica presidencia de la comisión de Acuerdos del Senado. Los jueces no fueron nombrados por sus méritos o por sus sabidurías sobre el Derecho, sino por sus afiliaciones o simpatías políticas.

Cuando accedió al poder, Menem cambió aquel regateo por un sistema más expeditivo: tumbó a la Corte Suprema de Alfonsín y amplió el número de sus miembros. Al mismo tiempo, ordenó sin más vueltas la designación de jueces amigos de sus amigos. Nació así lo que con el tiempo se llamaría la "justicia adicta", que perdió en el acto el crédito social.

El Parlamento se llenó, paralelamente, de hombres sin calidad política, intelectual y moral, en muchos casos. Hubo -y hay- excepciones, pero la corporación política se abroqueló en el Congreso a espaldas de la sociedad y de sus responsabilidades. Las listas sábana, el clientelismo político y la preeminencia de las cerradas estructuras partidarias por encima de cualquier otro concepto político alejaron a ese crucial poder del Estado de la confianza de la sociedad y de sus propios compromisos básicos.

De la Rúa no pecó por haber inaugurado un sistema de sobornos a legisladores a cambio de la aprobación de leyes. Su pecado consistió en que lo hizo su gobierno, que prometió reincorporar una noción de moral pública en la administración nacional, convencido de que las cosas habían funcionado bien de esa manera durante gran parte del mandato de Menem. El diagnóstico fue acertado, pero el remedio era imposible.

Es probable que los sobornos de De la Rúa hayan sido los últimos que se pagaron, aunque algunas dudas saltaron, esporádicas y breves, durante la gestión de Duhalde. Pero la reforma política para transparentar los procedimientos del Congreso, y también la elección de sus miembros, sigue siendo un desafío al que la estirpe política se niega, coherente y contumaz.

Si Néstor Kirchner no avanzara en esos menesteres, es posible que sus aires de renovación terminen sirviendo sólo para perpetuar a la vieja corporación política.

En el alba de la democracia, en 1983, era necesario restaurar el estado de derecho tras su ausencia más notable durante el siglo XX. Alfonsín tuvo el mérito de cumplir esa tarea, tras ordenar el primer juicio político a los militares por haber perpetrado un golpe de Estado y por haber condenado a miles de argentinos a la desaparición y la muerte. El enjuiciamiento a la dictadura de los años 70 no concluyó ahí, aunque el presidente radical intentó ponerle un límite con las leyes de obediencia debida y de punto final, y muchos juicios se reabrieron luego cuando apareció el caso no juzgado de los niños robados en cautiverio.

A pesar de los indultos de Menem, los más importantes exponentes del régimen militar han estado presos, por una razón u otra, durante la mayor parte de estos 20 años.

Si Alfonsín había sometido a los militares al juicio político y social, Menem les sacó a los uniformados los imponentes recursos financieros con que contaban. Su jefe del Ejército, el general Martín Balza, hizo, además, la primera autocrítica pública de los militares latinoamericanos por los golpes de Estado y por las violaciones a los derechos humanos. A la vez, convirtió a los militares argentinos en uno de los tres mejores ejércitos del mundo en el ejercicio de tropas de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas. Más allá de la opinión que pueda merecer su política de profundizar la investigación del pasado violento, el discurso de Kirchner es injusto con la historia, porque no reconoce que aquello también pasó y que hubo importantes revisiones de los crímenes cometidos por el Estado en el segundo lustro de la década del 70.

Sin remedio

Dos cosas parecen no tener remedio en la Argentina democrática: la falta de diálogo y de debate entre los principales exponentes de la vida pública y la absoluta carencia en los presidentes argentinos de cierta noción de las reglas que ordenan los asuntos económicos. Por ejemplo, Alfonsín desafió a Ronald Reagan por su política en América Central, pero Menem decidió, por sí solo, que era mejor tener una relación de alineamiento automático con los Estados Unidos. Ninguno de los dos consultó sus decisiones ni siquiera con los principales referentes del Congreso. Se trató, en ambos casos, de la voluntad infalible, solitaria y autosuficiente del jefe del Estado.

Conviene detenerse en la economía. Si Alfonsín despilfarró el tiempo y el crédito político hasta que las leyes inmutables de la economía lo desplomaron, Menem se abrazó a un programa económico, la convertibilidad, más allá de la prudencia y la ponderación, carente, a la vez, de una mínima idea sobre las consecuencias del endeudamiento público.

La correcta privatización de los servicios públicos que puso en marcha (y que en manos del Estado oscilaban entre el desastre y la catástrofe) no fue acompañada, en cambio, por los controles indispensables y por la competencia elemental. El final de ese proceso fue un cuestionamiento subjetivo e ideológico a todo el proceso privatizador.

Domingo Cavallo venía reclamando, desde diciembre de 1995, un acuerdo político amplio que permitiera abandonar mesuradamente la convertibilidad. "Si no lo hacemos, lo que nos espera es un monumental endeudamiento y rogarle a todos los santos para que Brasil no devalúe", le expresó en ese momento a uno de los principales hombres de la política argentina. Ocurrió el endeudamiento y Brasil devaluó en enero de 1999.

Ni Menem ni De la Rúa, uno porque quería una segunda reelección inconstitucional y el otro porque temía que una nueva devaluación sacara corriendo del gobierno a otro presidente radical, se animaron a tocar el tipo de cambio en un mundo que lo retocaba permanentemente.

Sin embargo, y seguramente como consecuencia de todo aquello, la mayor deuda de la democracia es con la propia sociedad argentina. Según un estudio del analista económico Orlando Ferreres, en 1983 la tasa de desempleo apenas rozaba el 4 por ciento de la población económicamente activa, menos del 10 por ciento de la sociedad estaba bajo la línea de la pobreza y no existían argentinos indigentes. No era, desde ya, obra de los militares que se habían ido, sino las estelas perdurables de la vieja Argentina del pleno empleo y del ascenso social.

Veinte años después, la tasa de desempleo supera al 20 por ciento de la sociedad activa, más del 50 por ciento de los argentinos está bajo la línea de la pobreza y un 25 por ciento vive en la indigencia.

Kirchner ha comenzado por devolverle un indispensable espacio público a la política, pero su misión estaría peligrosamente inconclusa si no reconstruye, con prudencia y seriedad, la solvencia de la economía. Aquella fe social en la democracia es casi un milagro, pero ningún milagro sucede dos veces en la vida.

Por Joaquín Morales Solá

Un sentimiento que reunió a vencidos y vencedores

Por Félix Luna. Para LA NACION

Provengo de una generación que estuvo sellada por una certeza: la inevitabilidad del triunfo peronista en cualquier elección, habida o por haber.

Era una convicción triste porque implicaba la imposibilidad de una alternancia en el poder, condición indispensable de la democracia. Sabíamos que no era posible gobernar con el peronismo, pero tampoco sin él y mucho menos en contra. Me estoy refiriendo no sólo a las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón sino, sobre todo, a los años de Arturo Frondizi y posteriores. Pues a Frondizi lo voltearon porque el peronismo había triunfado en la provincia de Buenos Aires y a Illia porque sin duda habría de volver a ganar en 1967. Entretanto, la proscripción del peronismo y las mil maniobras que se hicieron para evitar su presencia en los comicios deterioraban el sistema democrático.

Este condicionamiento, la idea de que era imposible ganarle al peronismo, pesaba sobre mi espíritu mientras se desarrollaba la campaña de 1983. El candidato radical me resultaba simpático, los valores que sustentaba eran los míos. Me conmovía cuando recitaba el Preámbulo, admiré su coraje cuando anteriormente había enfrentado el aparato balbinista y reconocí en su vocación parricida la naturaleza de un político de raza. Pero cierto escepticismo sobre su éxito electoral aparecía a cada rato nublando mi óptica.

Sin embargo, poco a poco fueron creciendo mis expectativas. En agosto o septiembre de 1983 fui a Córdoba para participar en una Feria del Libro: mientras entraba al predio pasó un ómnibus escolar lleno de chicos alegres y alborotadores, y todos se asomaban haciendo el saludo con las dos manos que el candidato radical estaba imponiendo como una marca registrada. Allí pensé "puede ganar", porque cuando los chicos repiten las consignas o los gestos políticos de los grandes, sin duda está pasando algo. Y mi optimismo se reafirmó cuando asistí al gigantesco acto sobre la Avenida Nueve de Julio y, sobre todo, cuando millones de compatriotas (y también yo) comparamos la dignidad de esa manifestación con el patibulario rito de Herminio Iglesias en el cierre de la campaña peronista.

El escrutinio demostró que la invulnerabilidad del peronismo era mito desvanecido. Ahora debía convertirse en un partido más, había perdido su virtud mayoritaria. Su derrota abría la posibilidad de un sistema político más equilibrado.

Lo que ocurrió después no es materia de esta reflexión. Pero uno recuerda aquel domingo primaveral de hace veinte años y torna a sentir esa alegría que llenó calles y plazas, ese levantado sentimiento que reunió por un momento a vencedores y vencidos, aquella pulsión cívica que no atendía tanto al milagro de ver un peronismo limpiamente derrotado en las urnas sino a la apertura de una vida en paz y armonía, sin miedos ni odios, en las anchas moradas de la democracia.

Esta es la deuda de gratitud que, más allá de sus logros y fracasos, los argentinos mantenemos con Raúl Alfonsín.

La celebración de un país "distópico"

Por Guy Sorman. Para LA NACION

Si Tomás Moro hubiera conocido la Argentina, en lugar de escribir la Utopía , habría descubierto la "distopía", una isla donde todo funciona al revés, patas arriba. Las palabras llegadas desde afuera, cuando penetran en la Argentina, cambian de color y de significación. El observador extranjero ya no las reconoce más, se equivoca, se desconcierta. ¿Historia, democracia, economía? Todo eso que es relativamente claro en el Norte, tambalea en el Sur. ¿La historia? Olviden el progreso; yo no diría que en la Argentina la historia retroceda ni que titubee sino que marcha más bien hacia otros rumbos: lo desconocido, lo inesperado. Es sólo en nombre de esta concepción singular de la Historia que la Argentina celebra a héroes que son antihéroes y aniversarios que son antianiversarios.

Todo comienza con San Martín.

Hace 20 años, desembarqué al alba, en la neblina de Ezeiza. Mi anfitrión, el rector de la Universidad de Belgrano, Avelino Porto, me condujo derecho hasta la plaza San Martín para que depositara allí una corona. San Martín, en Francia, es un desconocido. Porto me relató su epopeya. San Martín, ¿fundador o precursor? Fue el primer argentino que eligió vivir en el exterior y no en la Argentina. ¡Un fundador que indica la salida!

La ceremonia se desarrolló en una atmósfera gentil de ópera napolitana. Yo tarareaba pero lo adecuado era quedarse tieso: advertí que se trataba del himno nacional. Una música compuesta exactamente para un pueblo de artistas, mal preparados para la guerra, según acabábamos de percibirlo en Malvinas.

La misma noche, me encontré con Borges en el hotel Claridge: el escritor me manifestó que ¡era inglés! En ese instante decidí enamorarme de la Argentina. ¿Tenía elección? El extranjero no la tiene: o se ama todo o se huye. Si intenta razonar, comprender a la Argentina, se volverá loco. Compruebo en mi entorno, en Europa, que todos aquellos que se aventuraron a un acercamiento racional a la Argentina terminaron arruinados o desesperados. Y la mayor parte renunció. El país prácticamente ha desaparecido de las pantallas, de las emisiones de nuestros medios y de nuestras especulaciones culturales, estratégicas o económicas, como si hubiera sido tachado del menú. Sólo los enamorados persisten. Amor y devoción, ya que uno no va a la Argentina más que para hablar a los argentinos de la Argentina. Lo que no es nuevo.

Hace justo un siglo, el célebre Anatole France fue invitado a Buenos Aires para una gira de conferencias. ¿Para hablar de qué?, preguntó el maestro. Pero... ¡de nosotros!, replicaron sus anfitriones.

Cuando la escritora Silvina Ocampo volvió de un largo viaje a la India, en los años treinta, fue entrevistada por los periodistas que le preguntaron: "¿Qué piensan allí de nosotros?".

Hace pues veinte años la democracia acababa de ser restaurada, lo que me valió ser invitado, a mí esta vez, para hablar de la Argentina a los argentinos y esto es lo que se me pide celebrar hoy.

Pero, ¿qué se celebra exactamente? Para restaurar la democracia, hubiera sido necesario que existiera. En todo caso, ¿cuándo había existido y cuándo había desaparecido? No está más claro hoy que veinte años atrás.

Desde luego, los militares habían dejado el poder, pero abatidos por causas internas, a la Gorbachov, y no desplazados por una revuelta democrática.

Es cierto, los argentinos habían votado, pero, ¿esto restableció o estableció la democracia?

En principio la democracia es un estado del espíritu, un estilo de relación en el interior de una sociedad que irriga todos los comportamientos, un modo de gestión calma de los conflictos. La democracia, en suma, es un estado del espíritu. Los partidos, las elecciones, no hacen más que traducir este espíritu democrático. Esas son, en todo caso, la definición y la experiencia occidentales. ¡Pero nada de eso ocurre en la distopía argentina!

En ésta, las instituciones de la democracia preceden al espíritu democrático. Es necesario también considerar que este espíritu está ausente o en otra parte, disimulado detrás de un ombú quizás, o perdido en la Patagonia. El caso argentino es en efecto singular, una democracia en que los electores tienen la "no opción" entre un partido y el mismo partido y cuyos candidatos proponen "no programas" que ellos cuidarán que no se concreten.

No llego por ello a la conclusión de que la Argentina no sea una democracia. Tampoco es lo contrario. Es, en sí misma, una especie singular. Creo, por otra parte, que la cuasi totalidad de los errores cometidos por los observadores de la Argentina, entre ellos los diplomáticos e instituciones internacionales, provienen de que todos la comparan con las naciones que se le asemejan. Pero esto es sólo en apariencia. En realidad, la Argentina es una categoría en sí misma, sui generis. No se parece más que a sí misma, no se le puede aplicar ningún tipo de encasillamiento: toda comparación es inoperante. Por consiguiente, decir que la democracia no ha aportado nada positivo a la Argentina, o bien pretender lo contrario, son observaciones carentes de sentido. En este tipo de controversia, cada uno puede tener una opinión o hasta dos o tres, contradictorias, preferentemente. Una controversia sin interés.

Más vale cuestionarse sobre la Argentina en sí misma. Y preguntarse por qué la economía retrocede, por qué las elites más cultivadas no participan en la vida política, por qué los inversores son extranjeros y la huida de capitales nacional, por qué el Estado es propiedad de un partido cuasi único.

Para esas preguntas de apariencia compleja, sempiterna, la respuesta, a decir verdad, no es muy compleja. Es ésta: como los argentinos consideran que nada se asemeja a la Argentina o que la Argentina no se parece a nada, encuentran normal aplicar a la Argentina métodos económicos y políticos totalmente diferentes de los que funcionan afuera, en todos lados.

La globalización del intercambio, la estabilidad de la moneda, el respeto por los contratos, el equilibrio de las finanzas públicas están consideradas en todas partes -algo que confirma la experiencia de las naciones- el fundamento de la prosperidad económica y de la equidad social.

Una cuestión de identidad

Hasta los chinos y Lula se dieron cuenta. Sin embargo, en Argentina es patriótico hacer todo lo contrario, con una cierta unanimidad que va desde el de más arriba hasta el hombre de la calle, pasando por los sindicalistas y los sacerdotes. Lo que vale para la economía se aplica a la política: es patriótico preservar a los partidos conocidos, sin programa, sin alternancia, para seguir siendo fielmente argentinos. ¡Una cuestión de identidad!

Imaginen para la Argentina una democracia fundada en la alternancia, una economía fundada en la apertura, un Estado modesto y equilibrado, empresarios audaces, un diálogo social calmo, los izquierdistas al margen. ¡Sería terrible: la Argentina podría funcionar! Pero, ¿sería aún la Argentina? ¿Sería todavía auténtica?

La distopía correría el riesgo de transformarse en utopía, los jóvenes no soñarían más con el exilio, los capitales se quedarían en el país, la palabra dada sería respetada, los contratos honrados. ¿La Argentina no perdería su virtud? En este vigésimo aniversario, ¿qué desear? ¿Una Argentina normal y eficaz, conforme a un modelo universal, o una Argentina auténticamente desbaratada? ¿O auténtica por ser desbaratada? Por mi parte, en nombre de mi pasión ciega, me comprometo. Me comprometo a sentir tanta pasión por una Argentina normal como por la que amo desde hace veinte años, la traidora que no deja de engañar a todos sus amantes y de ponerle los cuernos a todos sus inversores. ¿Una Argentina normal? Sería necesario una revolución o, preferentemente, una rebelión del espíritu... Espíritu, ¿estás allí?

Traducción: María Elena Rey

Democracia: de líderes y antilíderes.

Por Bartolomé de Vedia. De la Redacción de LA NACION

En los veinte años transcurridos desde el 30 octubre de 1983 -es decir, desde el día en que se restableció la democracia-, la sociedad argentina produjo algunos liderazgos carismáticos de proyección nacional, que tuvieron poderosa influencia en un momento dado y le pusieron su sello a una etapa determinada de la vida del país.

Pero esos liderazgos no perduraron en el tiempo: se desdibujaron -en unos casos con mayor rapidez, en otros más lentamente- y dejaron en la sociedad un intenso sabor de frustración.

El primero fue, obviamente, el de Raúl Alfonsín, arquetipo del político de estirpe tradicional, dueño de una oratoria aguerrida y vibrante. A él le tocó la responsabilidad de liderar el retorno a los carriles de la república democrática después de un largo y oscuro ciclo de violencias y vacíos institucionales. El 30 de octubre, el hombre de Chascomús cumplió la proeza de derrotar en las urnas al peronismo, una hazaña que hasta ese momento parecía impensable.

El liderazgo nacional de Alfonsín, como nadie ignora, tuvo corta vida. Se desplomó cuando entró en crisis en el mundo el modelo estatista propio de la "economía de bienestar", que había imperado durante medio siglo. En nuestro país, la señal inequívoca de ese colapso fue la hiperinflación.

Alfonsín, que entre 1983 y 1985 había conducido con altivez y prestancia el tránsito a la democracia, no era el líder adecuado para presidir esa otra transición que hacia 1987 alboreaba ya en el horizonte mundial: el paso al neoliberalismo. El nuevo desafío requería políticos de otra estirpe: más abiertos al pragmatismo, más distendidos, capaces -incluso- de sacarse de encima, como quien se saca un molesto sobretodo, los viejos paradigmas del populismo vernáculo, en cuyas fuentes habían abrevado durante tanto tiempo radicales y peronistas. Era el momento indicado para que apareciera en escena el segundo líder carismático de la era democrática: Carlos Menem.

En las antípodas de Alfonsín, el riojano construyó un liderazgo extravagante y divertido, que incluía una cuota abundante de simpatía personal y ciertos toques audaces de cinismo exitista. Su principal hazaña consistió en producir el viraje histórico que los tiempos reclamaban. Cumplió la proeza de abrazarse al modelo neoliberal sin despegarse de las entrañas del peronismo. Era algo así como lograr la cuadratura del círculo. Lo cierto es que consiguió frenar la inflación y estabilizar la economía.

Su liderazgo fue más duradero que el de su predecesor, pero en la segunda mitad de la década del 90 -consumada ya su reelección presidencial- entró en una acelerada espiral descendente y terminó también por desplomarse. Menem no tuvo los reflejos necesarios para advertir que en la nueva etapa que se había abierto en el país -que él mismo había ayudado a construir- el reclamo de la ciudadanía se había desplazado velozmente del eje económico al eje moral e institucional. El nuevo paradigma pasaba por la lucha implacable contra la corrupción.

La opinión pública le volvió la espalda al intrépido riojano. Hacia 1997, ya no importaba demasiado que hubiera frenado la inflación: ahora se consideraba intolerable que pulularan a montones los funcionarios denunciados como corruptos, que contara en la Corte Suprema con una "mayoría automática" y que en el fuero federal penal tuviera jueces que le eran incondicionales.

Entre 1999 y 2001 la sociedad argentina se dio a sí misma un respiro y engendró una suerte de "antiliderazgo": el de Fernando de la Rúa. Su figura quedó registrada en el imaginario social, en

efecto, como la de un "antilíder". No se lo juzgó por lo que fue o por lo que hizo, sino por lo que notoriamente no fue y por lo que manifiestamente no hizo. La lista de esos "no" fue interminable. No se mostró dinámico ni ejecutivo, no fue carismático, no contó con el apoyo incondicional de cúpulas partidarias ni de homogéneas mayorías legislativas, no cambió la Corte, no pretendió contar con una Justicia adicta. No quiso cambiar la historia. Y la historia -devoradora e impaciente- se ensañó con él.

El nuevo líder

El tercer liderazgo carismático es el de Néstor Kirchner. Este liderazgo exhibe una curiosa particularidad: se ha ido construyendo paso a paso desde el poder. Lo habitual es que los hombres públicos edifiquen sus liderazgos desde el llano y luego lo consoliden con sus primeros actos de gobierno. Ese fue el camino que siguieron Menem y Alfonsín y es también el que está transitando Lula en Brasil. Kirchner, en cambio, no tuvo la oportunidad de convertirse en un líder nacional en la etapa previa a su llegada al poder debido a que la votación que debía legitimarlo no se pudo realizar por la inesperada deserción de su contrincante.

Al dirigente patagónico no le quedó otra opción que invertir el orden de los factores: primero asumió el gobierno y después empezó a ganarse, en tensa carrera contra el tiempo, el consenso ciudadano. Eso determinó que desde algunos sectores se lo acusara de estar utilizando los resortes del Estado para construirse un poder unipersonal hegemónico.

Si se analiza bien la situación, la responsabilidad por esa alteración del curso ordinario de las cosas no es toda de Kirchner, sino también de quienes arteramente lo privaron de la victoria electoral que le hubiera permitido llegar a la Casa Rosada con el máximo título que otorga la democracia: la consagración por el voto popular.

Para completar este rápido repaso de los caudillismos o liderazgos políticos contruidos en la Argentina a partir de 1983 hay que decir dos palabras sobre Eduardo Duhalde. A diferencia de Menem, Alfonsín o Kirchner, el hombre de Lomas de Zamora nunca se esforzó por imponerse como un líder carismático ni por captar el respaldo de los sectores medios: prefirió edificarse un liderazgo estructural silencioso, menos ostensible, menos retórico, aunque tal vez más efectivo y duradero: su autoridad política reposa, como todos sabemos, sobre una sólida trama de fidelidades partidarias.

¿Cuál de estos diferentes liderazgos ha sido más beneficioso para la Argentina? Alfonsín se quedó en un republicanismo enfático, cuando había sonado ya la hora de las transformaciones estructurales. Menem supo llevar adelante las reformas de fondo, pero no supo crear una red de protección social que atenuara su efecto y cultivó -acaso sin darse cuenta- una imagen de permisivismo moral y de fiesta farandulera que terminó siendo el arma letal con que lo doblegaron sus adversarios.

Con De la Rúa, el liderazgo brilló por su ausencia. Con Kirchner, el liderazgo pasó a ser obsesivo y omnipresente. El estilo K, confrontativo y avasallador, gana espacio día tras día pero suscita temores y prevenciones. Duhalde, por su parte, sigue convencido de que la política es un arte que no se practica con gestos ampulosos y grandilocuentes sino sobre la base de sigilosas y discretas complicidades partidocráticas. ¿Tendremos alguna vez los argentinos un liderazgo democrático proporcionado a nuestras auténticas necesidades y ajustado a lo que pide la estructura presidencialista de nuestra Constitución? ¿Cómo debería ser ese líder? Seguramente, no tan rígido como Alfonsín, ni tan distendido como Menem. Ni tan pasivo como De la Rúa, ni tan hiperactivo como Kirchner.

Aquí se abren para los argentinos dos caminos posibles. Uno -el más fácil- es el que siempre hemos transitado: consiste en descalificar duramente a todos los que pasaron por la Casa Rosada y en acusar al que la ocupa actualmente de querer construir un poder hegemónico y hasta de estar manipulando, a su manera, al Poder Judicial. Una vez consumada la operación de descalificar a todos, de tildar a uno de corrupto, a otro de ambicioso, a otro de inútil, a otro de egocéntrico o de personalista, nos dedicaremos -se supone- a construir el liderazgo teórico, ideal e incontaminado que necesita la Nación. Lo haremos a partir de la pura abstracción, dejándonos ganar -una vez más- por nuestras fantasías y por nuestros sueños fundacionales, que nos llevan a buscar, después de cada crisis, héroes mesiánicos o cruzados que instalen a la Argentina en la senda de la perfección. El país real, entretanto, seguirá llorando en alguna alcantarilla, pues lo habremos barrido a escobazos, una vez más, como si fuera un trasto viejo.

Tal vez ha llegado la hora de probar el otro camino: el que consiste en no demonizar a nadie, en juzgar con humildad a los que pasaron por el poder de 1983 en adelante y aceptar que en todos existieron notas rescatables y muchos desaciertos, luces y sombras. Y en aceptar que Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner no han sido ángeles ni ogros. Fueron -son- hombres públicos de carne y hueso, que, de alguna manera, nos representaron a todos, aun en sus errores más gruesos.

Abandonemos el hábito de juzgar la historia reciente desde la colina de nuestra soberbia. No incurramos en el vicio fácil de descalificar en bloque todas las gestiones presidenciales que pasaron o están pasando y aboquémonos a la tarea -mucho más difícil- de separar, en cada caso, el trigo de la cizaña. Y en vez de condenar globalmente a los líderes o antilíderes que ejercieron el poder político -real o formal-, tratemos de capitalizar la experiencia que nos dejó cada etapa y, sobre todo, procuremos extraer de cada uno de los que pasaron lo mejor y no lo peor.

Construyamos los liderazgos de mañana a partir del barro que somos -tratando de descubrir lo bueno que ese barro social y humano esconde- y no de los arrebatos fundacionales que nos llevan a querer inventar de nuevo a la Argentina en cada recodo de la historia.

Ya sabemos a dónde nos condujo, en el pasado, el facilismo de despreciar en bloque todo lo vivido y de comprar los espejitos de colores de un porvenir fundado en abstracciones. Examinemos nuestra historia reciente con más humildad y extraigamos de ella las lecciones concretas -y no ilusorias- que puede brindarnos. Y mejoremos la realidad a partir de aceptar sus fragilidades y sus limitaciones. Será la mejor manera de empezar a ser un pueblo adulto.

Democracia: lo bueno y lo malo

Por Marcos Aguinis. Para LA NACION

A veces parece un juego, y a veces no tanto, responder a una pregunta con un paquete de noticias buenas y otro de noticias malas. ¿Cuál se prefiere primero?

El paquete de las buenas.

Los veinte años de democracia -debemos admitir- han consolidado la convicción de que es mejor una vida institucional azarosa que la más brillante de las dictaduras. Es claro que aún predominan los rasgos adolescentes, que abundan los desencantos. Pero no ha crecido la tendencia a quebrar el marco constitucional. Hemos marchado por unas Termópilas bravías que en otro tiempo hubieran desembocado en el desastre de las asonadas y ahora se encauzaron, hasta con muletas, por el camino de la ley.

Se ha producido un crecimiento prodigioso de las organizaciones no gubernamentales. Conforman un enjambre donde millones de ciudadanos brindan su tiempo, su pasión y sus habilidades para casi todos los quehaceres de la vida. En ellas se realizan tareas generosas y refractarias a la corrupción. Constituyen una reserva impresionante de vitalidad, de valores, de esperanza.

En estas dos décadas se han presentado dificultades económicas, aumentó la pobreza y la peste del hambre se ha ensañado con franjas demasiado anchas del país. Pero, como notable contraste, aumentaron también los gestos de solidaridad hasta niveles que en algunos tramos llegaron a la epopeya. Esto es importante como refutación, porque en líneas generales tendemos a suponer que el argentino es egoísta e insolidario.

Otro aspecto insoslayablemente positivo son las Fuerzas Armadas. A partir del golpe de Estado de 1930 iniciaron un papel lamentable que no sólo dañó al país, sino a ellas mismas, porque fueron perdiendo el respeto y cariño que les profesaba la mayor parte de la sociedad. También incrementaron su omnipotencia y su soberbia, hasta caer en la alienación de la última dictadura. Pero en estos 20 años, tras su resistencia inicial, fueron sometándose al poder civil y a la Constitución de una manera ejemplar. Con la excepción del episodio de la venta ilegal de armas -donde el poder civil condujo y se benefició con el delito-, podemos afirmar que las Fuerzas Armadas se comportaron como la institución menos corrupta que, además, se esmeró en buscar mejoramientos pese a la inédita reducción de su presupuesto.

En estos veinte años hemos gozado de una amplia libertad de prensa y de expresión, sólo mancillada por hechos oportunamente denunciados en provincias aún sometidas al poder feudal. Gracias a esta libertad se tiene acceso a un conocimiento más afinado de la realidad concreta. Aunque -es obligatorio recordarlo- los periodistas son humanos que no siempre evaden las cadenas de la subjetividad o la ideología, y los medios de comunicación son empresas que luchan por sobrevivir con métodos que en ciertos casos no se pueden exhibir sin rubor. Aunque la sociedad continúa confundida por el repiqueteo de consignas arcaicas y los informes distorsionados, se puede decir que conseguimos mayor apertura mental. O, en otras palabras, que ha disminuido la cerrazón fanática de otros tiempos. En consecuencia, en el pueblo argentino existe mejor disposición a la autocrítica, menos soberbia, y más interés en conocer la verdad, aunque lastime.

La Argentina puede mostrar un alto nivel de tolerancia religiosa, étnica, cultural y política. Somos un pueblo tranquilo que quiere vivir bien, pese a los grupos violentos que desean imponer el odio.

El paquete de noticias malas no es liviano. Tenemos el deber de examinarlo a fondo.

La corrupción fue ganando escaños a medida que nos alejábamos de los primeros meses de la renacida democracia. Es injusto afirmar que todos los políticos son corruptos, pero la mayoría toleró que sus partidos o fracciones deambulaban por caminos adoquinados de trampas que marginaban la ley. Sea para recaudar fondos o para los bolsillos personales -lo que culminó en el antológico "robo para la corona"-, esa enfermedad creció hasta niveles de vértigo. Lo más grave es que constituyó un modelo que se desparramó por el tejido social como un vertedero de inmundicias. En lugar de ser un instrumento al servicio de la comunidad, degeneró en instrumento que sólo beneficia a quienes lo empuñan. Uno de sus resultados fue el aumento del clientelismo y una hipertrofia del asistencialismo con fines electorales o de mera contención. Ni uno ni otro aspiran a superar la pobreza, mejorar la calidad de vida, consolidar la dignidad ciudadana. Hoy existen millones de argentinos que viven de subsidios que, en muchos casos, son imprescindibles, pero que en otros operan como cadenas de una sujeción política que tiene como efecto eternizar la pobreza.

La corrupción no sólo se refiere al dinero, sino a los valores que estructuran una sociedad. Ahora, por ejemplo, resulta tarea de cíclopes ponerle un cerco a la nequicia que se instaló en las fuerzas policiales. Esa deformación generalizada fue posible por la ineptitud o complicidad de muchos jueces, junto con la impune farandulización de la política.

Apreciamos que se sancione a la policía corrupta. Pero, ¿es inteligente arrojar a la calle centenares de policías entrenados, que no pueden ser objeto de vigilancia posterior? Es obvio que así van a transformarse en "mano de obra desocupada" -como los torturadores después del Proceso- y que muchos no podrán evitar la tentación de aplicarse al crimen. Mejor sería contenerlos, vigilarlos con personal bien adiestrado, mejorar su remuneración, aplicar sanciones ejemplares, reordenar la institución según modelos exitosos. También debemos preguntar ¿qué harán centenares de agentes de la SIDE arrojados a la calle? Esos policías y agentes repudiados, resentidos y descontrolados, aumentarán la ya insoportable inseguridad.

En estos veinte años de democracia no se pudo inyectar nada de transparencia en el sindicalismo argentino, uno de los más fascistas y retrógrados del mundo, con líderes millonarios que hablan en nombre de los trabajadores. Es un grotesco al que nos hemos acostumbrado tanto que ya ni percibimos su inmoralidad mafiosa.

También se puso de manifiesto la inestabilidad emocional. Todos los pueblos la tienen, pero en el nuestro llegó a decibeles muy altos. El cacerolazo que derribó a De la Rúa fue seguido por una euforia delirante, como si estuvieran abriéndose los pórticos de una durable felicidad. Se hablaba de democracia directa y se pensaba que de las asambleas populares surgirían los nuevos líderes. Luego estalló una consigna que dio vuelta al mundo: "°Que se vayan todos!" Esta consigna obtuvo tanta adhesión que objetarla con argumentos lógicos siempre caía mal, como un sabotaje al saneamiento político del país. Un año después quedó en evidencia que no se fueron todos, ni siquiera la mayoría, y que en los diversos distritos del país se votó por los mismos que seguían atornillados a sus afelpadas butacas: gobernadores, intendentes, diputados, concejales. ¿En qué quedamos, pues...? Quedamos en que fue un estallido emocional sin resultados prácticos. Como enseñanza, en el futuro deberíamos desconfiar de esos estallidos.

La educación sigue cuesta abajo. Pese a que las diversas dirigencias se llenan la boca con esa palabra, no han revelado disposición para jugarse en serio con el fin de instalarla en el sitio que exigen los desafíos del siglo XXI. Es una asignatura que nadie se atreve a cuestionar, pero tampoco a encarrilar. ¿Se acuerdan del Segundo Congreso Pedagógico Nacional, celebrado en 1986? Nuestra democracia estaba en la cuna y el gobierno de entonces invirtió un gran esfuerzo para convertirlo en el hecho de mayor trascendencia, que emulase al primero, efectuado en vida de Sarmiento. Pero la sociedad ni se dio por enterada y, tras sesiones insípidas, terminó sin pena ni gloria. Hoy asistimos a una decadencia que sólo es objeto de remiendos, porque aún no surgió el gobierno que se anime a ponerle el cascabel al gato.

Podríamos agregar otros puntos al paquete de las noticias buenas y al paquete de las noticias malas. Lo dejo para otra ocasión, porque no es recomendable indigestar ni siquiera con esto.

Para la Justicia, 20 años de altibajos

Por Adrián Ventura. De la Redacción de LA NACION

Durante los últimos 20 años, la Justicia ganó un papel protagónico en el escenario de la democracia y pasó a ser destinataria de muchos reclamos sociales, incluso algunos que exceden sus posibilidades. Pero esta hiperactuación judicial tuvo altibajos y no siempre mostró la mejor cara. Hasta 1983, algunas decisiones vinculadas con resonantes casos de hábeas corpus de esa época oscura les dieron a los cuatro jueces federales de entonces y a la Corte cierta fama. Pero si bien la imagen de la Justicia era buena, la ciudadanía tenía la impresión de que estaba frente a un poder sin mayor envergadura y desconocido.

"La sociedad colocó el foco sobre la Justicia con el juicio y condena a las juntas militares", dice Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces de la Cámara Federal, tribunal que integraban también León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Andrés D'Alessio. "Fue el mejor momento, por la significación que tuvo para el fortalecimiento de la democracia y porque se restableció el principio de no impunidad", afirma Arslanian, también ministro de Justicia durante la gestión de Menem.

"El otro momento importante fue la creación de los tribunales orales y de la Cámara de Casación Penal, en 1992. Quizá fue la reforma institucional más significativa", agrega Arslanian. Entonces, la sociedad ya percibía claramente que la Justicia había dejado de ser un mero actor de reparto. Claro que la fama también traería aparejada las críticas.

En 1983, Raúl Alfonsín nombró en la Corte Suprema a cinco jueces: Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, José Severo Caballero y Genaro Carrió. Los tres primeros cumplirán, el 10 de diciembre, 20 años como ministros.

"Alfonsín fue muy respetuoso de la Corte", recuerda Fayt, que hoy preside el máximo órgano judicial.

El constitucionalista Arturo Pellet Lastra tiene algunas dudas al respecto: "Es posible que Alfonsín, al nombrar a Caballero y a Belluscio, quisiera tener una Corte cercana a su gestión. Pero Belluscio resultó ser un juez muy independiente y también lo fue toda la Corte".

Durante los primeros años de democracia, la Corte fue marcadamente liberal. El penalista Alejandro Carrió recuerda que "desde 1983 hasta 1989, el alto tribunal reveló una notoria expansión en derechos individuales. Fue una reacción contra los períodos anteriores". En efecto, admitió el divorcio, garantizó los derechos de los imputados, como la inviolabilidad del domicilio, aceptó la objeción de conciencia y sentó bases firmes en materia de libertad de expresión.

En otros terrenos, se retrocedió enormemente: "La Corte de los 90 fue menos respetuosa de las garantías individuales", señala Carrió. En cambio, en materia de libertad de información, el máximo tribunal, durante los 20 años, sentó buenas pautas para el desempeño de los medios. Incluso, incorporó la doctrina de la real malicia, que protegió a los periodistas.

Pero hubo algunos hechos que produjeron un quiebre en la imagen de la Justicia. "Funcionalmente, en 1983, la Justicia era mejor que ahora. No había escándalos y había pocos expedientes", dice Horacio Lynch, ex director de Foro de Estudios para la Administración de Justicia y estudioso de los temas del sector durante más de treinta años. "Pero, durante los ochenta, la Corte dio algunos autoaumentos

para la Justicia. Había inflación y tenía la atribución de hacerlo. Pero la ciudadanía lo recibió mal", agrega.

Más allá de eso, fueron dos circunstancias las que produjeron un quiebre en la imagen de la Justicia. Por un lado, estalló el escándalo del Yomagate, donde la población no comprendía cuál era el papel de la jueza María Servini de Cubría frente a Amira Yoma y las famosas valijas. Por el otro, Menem amplió la Corte de cinco a nueve jueces, y el manoseo sobre la cúspide del poder fue evidente. El concubinato entre el poder y la Justicia se legalizó.

Seguirían, luego, otras manchas: el tribunal, por obra de la mayoría automática, dictó muchos fallos favorables al gobierno; avaló la intervención federal de Corrientes, decretos de necesidad y urgencia, la reducción de las jubilaciones y otros asuntos que irritaron a la población. A fuerza de estos tragos amargos, la opinión pública le dio la espalda a la Justicia: según un seguimiento que hizo Fores, la imagen de la Justicia cayó, del 57%, en 1984, al 26% en 1991 y, actualmente, se encuentra en un piso bajísimo, el del 12%.

Hubo, paralelamente, otros hechos que tornaron a buena parte del sistema como ineficaz. Por un lado, los expedientes se acumularon hasta saturar el sistema. Pero, por el otro, las principales causas comerciales dejaron de tramitarse en los tribunales argentinos. Así, a lo largo de los 90, Menem logró que se celebraran muchísimos tratados bilaterales de protección de inversiones extranjeras y en todos esos convenios la Argentina aceptó que los conflictos que tuvieran las empresas extranjeras -básicamente las privatizadas- se tramitaran en tribunales arbitrales del exterior.

En definitiva, hoy, la democracia está en deuda con una Justicia desvalida, ineficiente, vaciada de sus principales contenidos y de estabilidad. Basta con pensar que, entre 1983 y hoy, ya pasaron por la Corte 18 jueces, incluyendo al que está por asumir, Eugenio Zaffaroni.

Un nuevo ejército: dos décadas críticas

Por Rosendo Fraga. Para LA NACION

La evolución de las Fuerzas Armadas en los últimos veinte años puede observarse tomando como ejemplo a un subteniente del Ejército, a un guardiamarina de la Armada o a un alférez de la Fuerza Aérea que se recibió de oficial en diciembre de 1983 -o de cabo en el caso de los suboficiales- justo en el momento en que se reestablecía la democracia después del gobierno de facto más largo y traumático de la historia argentina.

Entre 1984 y 1986, este subteniente del Ejército vivió los juicios por las violaciones a los derechos humanos y la condena de los miembros de las tres juntas militares. Al año siguiente, los juicios se fueron ampliando, y se llegó a un millar y medio de procesados. Para evitar que esta situación se fuera extendiendo aún más, el Congreso sancionó la ley de punto final, por la cual las causas no iniciadas hasta ese momento ya no podían abrirse. Fueron, además, los años en los cuales la imagen pública de las Fuerzas Armadas llegó al nivel más bajo y en los que el primer ajuste económico, determinado por la administración Alfonsín, llevó a una reducción inédita -hasta ese momento- en términos de conscriptos incorporados, partidas para funcionamiento e inversión en adquisición y mantenimiento de equipos.

Este subteniente "tipo" que se recibió de oficial justo cuando se reestableció la democracia ascendió a teniente en diciembre de 1986 y sería teniente los tres años siguientes. Con este grado, participaría en otra experiencia traumática para el Ejército, como fueron los alzamientos "carapintadas" de abril de 1987, enero de 1988 y diciembre de ese mismo año. Los subtenientes de la "guerra sucia" eran capitanes entonces. Los tenientes eran mayores, y los tenientes primeros, tenientes coroneles.

Ellos juegan el papel protagónico en estos enfrentamientos, que suman el rechazo a la detención de los oficiales en actividad que cumplieron órdenes durante la "guerra sucia" y se sienten frustrados por el no reconocimiento de sus acciones individuales en Malvinas.

Para resolver el conflicto, en 1987, el Congreso aprobó la "ley de obediencia debida", enviada por Alfonsín, por la cual se exculpaba a todos los que en el momento de las violaciones a los derechos humanos tenían el grado de teniente coronel para abajo, con la excepción de los delitos "aberrantes" como la sustracción de menores. La combinación de las dos leyes -punto final y obediencia debida- redujo sólo a decenas los detenidos y procesados, ya todos ellos en situación de retiro.

Pero el fenómeno carapintada había adquirido una dinámica propia, con un fuerte cuestionamiento a los mandos de entonces. Fue así como el segundo y el tercer alzamiento tuvieron lugar con las dos leyes sancionadas. A comienzos de 1989, se produjo el ataque terrorista al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada -que fue la evidencia de que el terrorismo existía y era una amenaza- y Alfonsín firmó un decreto autorizando que las Fuerzas Armadas participaran en la represión interior, si se vieran afectadas las unidades militares.

El teniente ascendió a teniente primero en diciembre de 1989, ya con Menem en la presidencia, y permanecería en ese grado los cuatro años siguientes. En ese período tuvieron lugar los indultos de Menem, que alcanzaban tanto al remanente de procesados y detenidos por las violaciones a los derechos humanos como a los líderes de los motines carapintadas. Ello permitió a Menem reprimir con eficacia y contundencia el cuarto y último alzamiento que se produjo en diciembre de 1990. Los

indultos y el final de los carapintadas cerraron un ciclo de una década muy crítica para las Fuerzas Armadas.

Los acontecimientos descritos, si bien tuvieron como epicentro el Ejército, también repercutieron en la Armada -afectada por casos como Astiz- y en menor medida también en la Fuerza Aérea.

A comienzos de los años 90, la participación en las fuerzas multinacionales de paz abrió nuevas perspectivas para el personal militar. En esa década, llegaron a ser decenas de miles los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en dichas misiones, en lugares como Irak, Kuwait, Angola, Chipre, Croacia, Bosnia o América Central.

La disciplina se reestableció. Los ajustes presupuestarios continuaron en la primera mitad de los años noventa. La cantidad de conscriptos incorporados siguió reduciéndose. Las fábricas militares se privatizaron. El estancamiento de los salarios generalizó el doble trabajo en gran parte de los cuadros. La insatisfacción dejó de ser política para pasar a ser fundamentalmente económica. Pero la imagen de los militares fue mejorando. En esos años, después de los medios de comunicación y la Iglesia, fueron los que registraron la mejor imagen. El subteniente tipo que hemos tomado como ejemplo ascendió a capitán en diciembre de 1993 y permanecería en ese grado los cuatro o cinco años siguientes. Las condiciones generales no se alterarían sustancialmente en la segunda mitad de los años noventa.

El fin del servicio militar

Pero el llamado "caso Carrasco" -el asesinato de un conscripto en una unidad militar de la Patagonia- precipita el cambio más importante en las Fuerzas Armadas desde comienzos del siglo: la eliminación del servicio militar obligatorio y su sustitución por la tropa voluntaria. Contra muchos pronósticos iniciales, el cambio se realiza en forma no traumática, permite una mayor profesionalización y evita una cuestión conflictiva en la relación entre las Fuerzas Armadas y la juventud.

En materia de derechos humanos, las leyes de punto final y obediencia debida de Alfonsín, junto con los indultos de Menem, reducen el problema a la derogación simbólica de ambas leyes por parte del Congreso a fines de los noventa y a varias detenciones por las causas de sustracción de menores, incluidas las de figuras como Videla y Massera.

El capitán ascendió a mayor en diciembre de 1998. Dejó de ser oficial subalterno para ser jefe y permanecerá en este nuevo grado hasta diciembre de 2003, cuando lo asciendan a teniente coronel.

Como mayor, fue testigo de la más grande crisis política vivida por el país desde el reestablecimiento de la democracia y la más grave de la historia en lo económico-social. Vio pasar el final del segundo mandato de Menem, los dos años de De la Rúa, la breve presidencia de Rodríguez Saá, el año y medio de la transición de Duhalde y la llegada de Kirchner.

La posibilidad de que las causas por derechos humanos se reabrieran a partir de pedidos de extradición de la justicia europea llevó a De la Rúa a firmar el decreto por el cual se dispuso que el gobierno rechazaba los pedidos de extradición sin tramitarlos en la justicia. Rodríguez Saá, en sus pocos días de gobierno, tuvo la iniciativa de derogarlo, pero después dio marcha atrás. Duhalde a su vez, quiso finalizar su mandato dejando cerrado el tema de la revisión judicial por la guerra sucia y, en sus últimos días, indultó a los presos por el ataque a La Tablada y a los líderes del último motín carapintada, mientras gestionó ante la Suprema Corte un fallo que declaró constitucionales las leyes

de obediencia debida y punto final, que estaban siendo cuestionadas por fallos de primera y segunda instancia. Pero entregó el poder sin el fallo requerido.

En el segundo semestre de 2003, Kirchner dio un vuelco sustancial a la política de sus predecesores con respecto a las Fuerzas Armadas. Derogó el decreto de De la Rúa que impedía las extradiciones; promovió y logró en el Congreso una ley que declarara nulas las de punto final y obediencia debida; cuestionó la constitucionalidad de los indultos de Menem y gestionó ante la Corte un fallo contrario al que pretendía Duhalde, buscando que el tribunal de Justicia convalidara la declaración de nulidad del Congreso.

Los detenidos en este contexto se cuentan por decenas -hasta ahora-, pero en los próximos meses serán centenas y podrían llegar a ser miles, dado que además de reabrirse las causas suspendidas por la ley de obediencia debida se abrieron otras nuevas al caer la ley de punto final.

¿Todo en vano?

Los actuales oficiales o suboficiales superiores, que comandan las Fuerzas -egresados en los años setenta y partícipes en la llamada "guerra sucia"-, vuelven así a poder ser acusados y detenidos, mientras que quienes se incorporaron a las Fuerzas Armadas en los últimos veinte años -como el mayor que en diciembre ascenderá a teniente coronel- ve así cómo el retorno de un proceso que pensaban superado reaparece y genera dificultades en su relación con la sociedad civil.

Pero esta situación debe ser evaluada también a partir de un dato sociológico. Uno de cada tres miembros de las Fuerzas Armadas es hijo de un militar. Otro de cada tres tiene otro grado de parentesco: sobrino, hermano, yerno. Es decir que dos de cada tres militares tiene una relación familiar con otro miembro de las Fuerzas Armadas. Esto crea una solidaridad intertemporal que impide una ruptura generacional y atenúa el conflicto de intereses que pudiera existir entre retirados, mandos, oficiales intermedios y subalternos.

En conclusión, a veinte años del reestablecimiento de la democracia, la reapertura de los procesos por la "guerra sucia" genera, en las Fuerzas Armadas, la sensación de que los importantes esfuerzos y progresos realizados en estas dos décadas para lograr la plena subordinación al poder civil y la reconciliación con la sociedad civil pueden haber sido en vano.

Los militares ya no son actores políticos

Por Robert Potash. Para LA NACION

Estos veinte años fueron testigo de una significativa transformación en el papel que juegan las Fuerzas Armadas. Durante buena parte de la mitad del siglo que precedió a la elección de Raúl Alfonsín, el Ejército, y en menor medida la Armada y la Fuerza Aérea, operaron como una fuerza política. De manera directa, cuando asumieron el control del gobierno; de manera indirecta, cuando pretendieron limitar la capacidad de decisión de los presidentes civiles. Casi siempre sus acciones contaban con el respaldo de sectores significativos de la comunidad civil. Desde 1983, sin embargo, las Fuerzas Armadas han postergado su papel político, al punto que difícilmente puedan ser vistas hoy como actores en esas lides. Una ilustración dramática de este cambio es la que se observó en el caótico período que precedió y siguió a la renuncia de Fernando de la Rúa, cuando no hicieron ningún esfuerzo para llenar el vacío político.

Las explicaciones sobre el declive de este papel deben buscarse, por un lado, en el cambio de la actitud pública hacia los militares y, por otro, en las medidas adoptadas por los gobiernos de Alfonsín y Menem, pero también en los cambios institucionales que el propio liderazgo militar introdujo en la década de los noventa. Elegido en una ola de sentimiento antimilitar, un legado del Proceso, Alfonsín tomó la medida sin precedente de llevar a juicio a los nueve miembros de las juntas por crímenes y otras violaciones a los derechos humanos. Cinco generales y almirantes fueron condenados y sentenciados de 17 años a cadena perpetua.

Pero, preocupado por el efecto que podían tener en la lealtad militar los posibles juicios de cientos de oficiales, Alfonsín obtuvo del Congreso, en diciembre de 1986, la ley de punto final, que determinó un límite de sesenta días para iniciar nuevos procesos. Pocos meses después, durante Semana Santa, el gobierno tuvo que enfrentar la insurrección liderada por el teniente coronel Aldo Rico, un oficial políticamente ambicioso que supo aprovechar la cólera de un grupo de capitanes. Sentían que la jerarquía del Ejército los había abandonado. Después de negociar el fin del motín, Alfonsín le pidió al Congreso que aprobara la ley de obediencia debida, que absolvió a todo personal militar, por debajo de los comandantes de zona, de responsabilidad criminal durante la represión.

Ambas leyes fueron criticadas como una concesión. Sin embargo, ayudaron a restaurar la disciplina jerárquica y permitieron que Alfonsín acudiera al Ejército para enfrentar en enero de 1988 una segunda rebelión de Rico, otra liderada por el Coronel Mohammed Seineldín en diciembre y aplastar, en 1989, el asalto al cuartel de La Tablada.

Dejando de lado los juicios, los años de Alfonsín vieron la promulgación de una serie de medidas destinadas a reforzar el control del Presidente y su ministro de Defensa sobre las Fuerzas Armadas, a prohibir su involucramiento en cuestiones de seguridad doméstica y a reducir su autonomía permitiendo que militares acusados de crímenes comunes, incluso si tenían lugar en una base militar, fueran juzgados en tribunales civiles. Como símbolo de este deslizamiento hacia el liderazgo civil, el máximo oficial de cada una de las fuerzas dejó de ser llamado Comandante en jefe y pasó a ser denominado Jefe del Estado Mayor. Sólo el Presidente, como cabeza constitucional de las Fuerzas Armadas, recibiría el título de Comandante en jefe.

Mientras las medidas arriba citadas creaban un nuevo marco legal al cual las Fuerzas Armadas debían adaptarse, fueron las decisiones presupuestarias iniciadas por Alfonsín y continuadas por Menem las que tuvieron mayor impacto en su estructura y en sus capacidades operativas. Entre 1984

y 1996, los gastos militares, como parte del presupuesto nacional, fueron reducidos a la mitad. Los salarios militares cayeron a niveles históricos y muchos oficiales y suboficiales debieron encontrar trabajos alternativos a pesar de las regulaciones que disponían lo contrario; otros, con habilidades técnicas, abandonaron sus carreras por trabajos en el sector privado. Para ajustarse al presupuesto, el Ejército llevó adelante drásticas reducciones al punto que, en 1996, la fuerza tenía 42.000 efectivos, vale decir, la mitad de lo habitual. Además debió embarcarse, a principios de los 90, en una reestructuración que disolvió 80 unidades y reubicó otras lejos de los centros urbanos para poder vender sus terrenos.

El acceso a la presidencia de Carlos Menem, en 1989, señaló un nuevo tratamiento de los asuntos militares. Si Alfonsín rechazó otorgar indultos, Menem quería bajarle la cortina a la violencia del pasado. Creía que esto pacificaría a las Fuerzas Armadas y promovería una conciliación nacional. En octubre de 1999, lanzó una serie de perdones que alcanzó, además de a los jefes de la Junta, a los que participaron en las rebeliones de 1987-1988. Sin embargo, un año después, en diciembre de 1990, se vio enfrentado con un alzamiento de oficiales nacionalistas guiados por el coronel Seineldín. La rebelión fue rápidamente sofocada por las fuerzas leales: fue la última vez que militares argentinos se levantaron contra un gobierno o contra sus superiores.

El general Martín Balza asumió como Jefe del Estado Mayor del Ejército en 1991 y conservó su puesto durante los siguientes ocho años, un período que vio cambios significativos en el Ejército. En 1994, tras la sospechosa muerte de un conscripto, se reemplazó el servicio militar por el reclutamiento voluntario. Tres años después, el Colegio Militar abrió sus puertas a cadetes mujeres. También se cambió la currícula, que obliga a los cadetes a completar, además de los cursos militares, el equivalente a un programa universitario. También se realizaron cambios en los programas de la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Superior Técnica, que ahora ofrecen programas de posgrado abiertos tanto a estudiantes civiles como militares.

Durante la década del 90, la cúpula del Ejército hizo serios esfuerzos para cambiar la cultura de esa fuerza. La currícula del Colegio Militar incluyó un curso en derechos humanos; a los cadetes se les enseñó que los militares, como tales, no tenían ningún papel político. Su obligación era servir a la nación y obedecer a las autoridades constituidas. Que estos esfuerzos han sido exitosos lo sugieren la purga realizada por Néstor Kirchner en las Fuerzas Armadas o su anuncio de que reabría las causas contra militares por abusos de derechos humanos durante los años del Proceso. Tenía la confianza en que, sintieran lo que sintieran, las Fuerzas Armadas aceptarían sus decisiones sin protestas. El hecho de que haya estado en lo cierto prueba hasta qué punto los militares de hoy difieren de sus predecesores.

El autor es historiador norteamericano, experto en temas militares argentinos.

Aquella Argentina ilusionada

Por Pablo Mendeleovich. Para LA NACION

Bajo el imperio de la historia, las décadas y los siglos se valen de almanaques elásticos. Como la "década infame", que se estiró hasta 1943, o la del sesenta, iniciada temprano con la ilusión frondicista. Bien puede decirse entonces que el embrionario año democrático 1983 arrancó a las nueve de la noche del 14 de junio de 1982, en el momento en que el general Mario Benjamín Menéndez firmaba la rendición argentina ante el general inglés Jeremy Moore.

El fiasco de Malvinas, se sabe, produjo la herida mortal del Proceso -la tercera junta militar le había apostado a la guerra su propio sueño de perpetuidad-, más allá del hecho de que en el contexto latinoamericano, por esos años, ya se había invertido el vector torrencial del *jure al facto*. Pese a la debilidad de las Fuerzas Armadas, o justamente por eso, iban a transcurrir nada menos que 503 días entre el final de la guerra y las elecciones. No era la falta de padrones depurados, de régimen electoral o de ley orgánica de partidos políticos lo que producía insomnio entre los militares, sino el anhelo de negociar con parsimonia -al cabo inútil- los dos aspectos incriminadores de la herencia: además de las responsabilidades por la represión ilegal, la corrupción oficial que había comenzado a ventilarse después de Malvinas bajo el eufemismo de "los ilícitos".

Tras rendirse, Leopoldo Galtieri apenas alcanzó a gallear que "el derrotismo será traición" cuando sus pares, entre perplejos y confundidos, lo depusieron. El general Cristino Nicolaidis se sentó entonces en la comandancia del Ejército, desde donde no consiguió sincronizar con la Armada y la Fuerza Aérea la designación del presidente que -tal era el plan- les devolvería el poder a los civiles en 1984. La otrora poderosa junta militar se desintegró.

Reynaldo Bignone, el escogido de Nicolaidis, fue así el único presidente de la historia que llegó al cargo con un voto. Uno. Y se trató, por fin, del último uniformado que le cruzó la banda presidencial a un político de traje.

Un mundo en cambio

En aquel 1983 había nacido -pocos entendían de qué se trataba- el disco compacto. Aunque se incubaba en el Norte la aldea global electrónica, el mundo permanecía enroscado en los flecos de la Guerra Fría. Un coletazo fue la invasión de Estados Unidos a Grenada. Otro acabó con las 269 personas que viajaban en un Boeing 747 de Korean Airlines, derribado por un caza soviético sobre la isla Sakhalin con el argumento de que parecía un avión espía.

Ronald Reagan llevaba dos años en la Casa Blanca, tantos como la supuesta armonía del matrimonio, aún glamoroso, de Carlos y Diana. En Filipinas era asesinado Benigno Aquino, el recién encumbrado Felipe González despenalizaba el aborto en la España posfranquista y Bettino Craxi formaba en Italia el primer gobierno socialista. Fue 1983 el año en que murieron Luis Buñuel, Joan Miró, Tennessee Williams; el año en el que Lech Walessa fue premio Nobel de la Paz y también el de las anteúltimas máquinas de escribir.

El cine nacional era elocuente. Además del documental antigolpista "La República perdida", se había estrenado en las salas de barrio "No habrá más penas ni olvido", de Héctor Olivera, basado en la novela alegórica de Osvaldo Soriano. Los cines también exhibían "El poder de la censura", "Los extraterrestres" y "Espérame mucho".

La Argentina tenía poco más de 28 millones de habitantes, una deuda externa de 45 mil millones de dólares y una inflación anual del 430 por ciento. Las protestas sindicales -florecía el liderazgo de Saúl Ubaldini, aunque abundaban las divisiones- se entrecruzaban con la ebullición política. La falta de libertades había comenzado a aflojarse (también legalmente: a mitad de año el régimen repuso el derecho de huelga), lo mismo que la censura, lo cual no impidió que el semanario El Porteño sufriera un atentado ni que el gobierno persiguiera a la singular revista Humor, en pleno auge. Muchos jueces comenzaron a admitir recursos sobre desaparecidos y uno de ellos, Oscar Salvi, puso preso por primera vez a Emilio Massera, en el marco de la causa por el crimen del empresario Fernando Branca.

Asociados con el fruto prohibido de la democracia, los políticos ganaban prestigio a medida que renacía la actividad partidaria. Desde mediados de 1981, justicialistas, radicales, desarrollistas, democristianos e intransigentes impulsaban una salida institucional desde la Multipartidaria. Bignone celebró aparatosas rondas de diálogo con la dirigencia política y también hubo puentes discretos con el Ministerio del Interior. Ambos caminos, sin embargo, arrojaron escasos resultados concretos. Aparte del adelanto de la entrega del poder, previsto originariamente para el 30 de enero de 1984 -se realizó el 10 de diciembre- y de las reglas de juego electorales -menos novedosas que las de la anterior elección, diez años antes, organizada por Lanusse-, no hubo acuerdos verificables con respecto a los temas más sensibles. Se trató, en definitiva, de una retirada militar caótica gerenciada por un presidente débil.

Estaba de moda el verbo participar, convertido en sinónimo de afiliación: nunca se superaron los récords del año 83, origen de la mayoría de las fichas de cartulina que hoy juntan tierra en los subsuelos de la Cámara Nacional Electoral. El mismo sentimiento repulsivo que se había focalizado en los políticos en las vísperas del golpe de 1976 -y que se repetiría, apenas con matices, al estrenarse el siglo XXI- estaba ensañado entonces con los militares, artífices excluyentes, según la visión media contemporánea, de todos los males argentinos. Un beneficiario tardío de esa temporada maniqueísta fue el ex presidente Arturo Illia, derrocado 17 años antes y fallecido a comienzos de 1983, a quien se empezó a reivindicar más allá de los cenáculos radicales en consonancia con la transversalidad política que construía Raúl Alfonsín. En la otra vereda estaba el peronismo, que fuera de las proscripciones jamás había perdido una elección y confiaba en su destino de invicto, aunque esa vez debía enfrentar las urnas sin Perón vivo ni mecanismo alguno que reemplazase al legendario verticalismo. Bien lo supo el circunspecto y grisáceo Italo Luder, seleccionado candidato presidencial por un puñado de dirigentes, entre ellos Lorenzo Miguel, en la habitación de un hotel. O Herminio Iglesias, el candidato a gobernador bonaerense cuyo matonismo terminó impregnando la campaña con dudosa fortuna, sobre todo cuando echó mano de un ataúd de su rival en llamas para seducir a indecisos.

Con Bignone era ministro de Economía, cuándo no, Jorge Whebe, quien también había cerrado el ciclo militar anterior, a las órdenes del general Lanusse. En los sesenta Whebe ya había sido último ministro de Frondizi y luego reportó a Guido. Pero la historia no le dio una quinta oportunidad de conducir la política económica. El presidente del Banco Central, en cambio, estaba empezando su carrera. Era el entonces joven y menos calvo Domingo Cavallo.

En junio de 1983 entró en vigencia el "peso argentino" (uno por cada 10 mil pesos ley 18.188), fulminado un suspiro después por el Austral. Sin embargo, un hito más memorable de la cotidianeidad del 83, acaso un símbolo de la descomposición del régimen, fue el severo insulto que Francisco Manrique le propinó al general Ramón Camps durante un cruce radial, algo hasta entonces impensable

no sólo por la calidad del lenguaje público sino, sobre todo, por el destinatario. Temible, salvaje, insolente represor, Camps era el más jactancioso de todos.

El tema de los derechos humanos -las secuelas de la guerra antsubversiva o "los excesos", según el léxico oficial- originaba infinitas fricciones, ya fuera por el presuntuoso "Documento final" de las Fuerzas Armadas del 28 de abril, que fue saludado por el Episcopado horas antes de que el papa Juan Pablo II se solidarizase con los familiares de los desaparecidos, o por la famosa autoamnistía 1973-82 de los postres del Proceso, derogada por el Congreso en su reinauguración. El escenario público comenzó a llenarse de marchas de resistencia, testimonios de sobrevivientes, ollas destapadas con dimensiones trágicas. Igual, en mayo fueron secuestrados y asesinados dos militantes peronistas, Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi.

Desorbitó en simultáneo al peronismo y al Ejército la denuncia que hizo Alfonsín de un "pacto sindical-militar" y sacudió a las Fuerzas Armadas ese mismo año, por si faltara algo, el lapidario Informe Rattenbach sobre las responsabilidades castrenses en la guerra de Malvinas.

Pero quizás hayan sido los actos multitudinarios del radicalismo y el peronismo la mejor fotografía del clima de aquella Argentina ilusionada. Tanta euforia política nunca se volvió a ver.

El camino hacia el respeto de la legalidad

Por Héctor Ríos Ereñú. Para LA NACION

Pertenezco a una generación que desarrolló la mayor parte de su carrera militar en el marco de la inestabilidad política que dominó un largo período de nuestra historia. En efecto, nuestro egreso como oficiales del Ejército argentino se produjo en el mismo año que el frustrado golpe de Estado contra el presidente Perón en 1951.

Como oficiales subalternos participamos en significativos hechos que conmovieron a nuestro país: el derrocamiento de Perón, la caída del gobierno de Arturo Frondizi, el enfrentamiento armado entre sectores de las Fuerzas Armadas (azules y colorados) en 1962 y 1963, el golpe de Estado contra el presidente Arturo Illia y su consecuencia, la denominada Revolución Argentina.

En la jerarquía de oficiales jefes y oficiales superiores asistimos al cese del gobierno de Isabel Perón y al Proceso de Reorganización Nacional. Fuimos testigos del trascendente acto electoral del 30 de octubre de 1983, cuando, en igualdad de posibilidades, el peronismo por primera vez fue derrotado desde su aparición en la política.

Este sintético encuadre era el origen de nuestro bagaje cuando debimos enfrentar la etapa que se iniciaba el 10 de diciembre de 1983 con la asunción del doctor Raúl Alfonsín. En lo personal, las experiencias vividas me habían permitido extraer algunas conclusiones básicas:

- 1) los altos costos que las Fuerzas Armadas habían sufrido por su participación en hechos políticos y por haber ejercido la responsabilidad de conducir dos largos períodos de gobiernos de facto;
- 2) la no obtención de los objetivos propuestos a la sociedad en dichos gobiernos provocaban, en gran parte de ella, el rechazo, el convencimiento de su falta de capacidad para el ejercicio de tal tarea y, más aún, se consideraba innecesaria su presencia como institución permanente del Estado;
- 3) la derrota sufrida en la guerra por la recuperación de las islas Malvinas había puesto en evidencia la poca capacidad para la acción conjunta de las Fuerzas Armadas, requisito indispensable para tener alguna probabilidad de éxito en situaciones bélicas;
- 4) la victoria militar obtenida ante el terrorismo subversivo, que pregonaba el cambio de nuestro sistema político para establecer en nuestro país la "patria socialista", estaba empañada por el cuestionamiento a métodos de lucha empleados en algunas oportunidades, y por los errores y excesos producidos, que son propios de la guerra no convencional;

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno que iniciaba el difícil camino de la transición (gobierno de facto-gobierno constitucional), me permitieron incorporar elementos de juicio para reafirmar mis convicciones acerca de la actitud que debía regir mi conducta como general de la Nación en la etapa que se iniciaba. Debemos recordar que el Poder Ejecutivo decidió:

- 1) reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas a un tercio del vigente en 1983;
- 2) someter a juicio a las Juntas Militares que condujeron el Proceso;
- 3) reformar el Código de Justicia Militar y sancionar leyes y disposiciones para realizar el juicio previsto;
- 4) retener en el Presidente el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas y designar un Jefe de Estado Mayor General como nivel superior de las mismas;
- 5) delegar escasa autoridad en cada uno de los Jefes de Estado Mayor;

6) trasladar al Ministerio de Defensa todo lo relativo a la industria militar.

La falta de conocimiento personal entre los mandos superiores de las Fuerzas y quienes ejercían funciones de gobierno era campo propicio para la presencia de un clima de desconfianza mutua que generaba no pocas dificultades. A pesar de todo ello, después de un exhaustivo análisis estaba persuadido de que era necesario:

- 1) tener claro que las Fuerzas Armadas no constituían los medios adecuados para la solución de los problemas políticos del país;
- 2) la participación directa en la política afectaba su profesionalidad, las alejaba de su misión primordial y perjudicaba la relación que debían mantener con todos los sectores de la comunidad;
- 3) mantener total subordinación al poder político, cumpliendo acabadamente con las misiones que aquel le impusiera;
- 4) acatar las resoluciones de la Justicia haciendo uso de los derechos que establecen las leyes para la defensa de los intereses de las Fuerzas y de sus integrantes;
- 5) promover una reestructuración del Ejército acorde con las misiones a cumplir y a los medios puestos a su disposición;
- 6) fortalecer la acción conjunta para lograr el máximo rendimiento operacional;
- 7) ejecutar la mayor interacción posible con las instituciones gubernamentales y con la sociedad para lograr un mayor conocimiento recíproco que facilitara despejar las dudas acerca de la posición de las Fuerzas Armadas ante los tiempos presentes;
- 8) trabajar intensamente para hacer realidad la superación de las secuelas de la instancia de violencia que vivió nuestro país y lograr así una efectiva reconciliación;

Estas eran mis convicciones cuando los argentinos emprendimos llenos de esperanza un nuevo acontecer. No tenía dudas de que surgirían dificultades y que todos, sin excepción, seríamos puestos a prueba y se nos requerirían esfuerzos y sacrificios. El paso del tiempo me fue demostrando que no estaba muy equivocado en mis apreciaciones. En un año, dos Jefes de Estado Mayor del Ejército fueron relevados. Me tocó ser el tercero (marzo de 1985 a abril de 1987) y traté de cumplir con mis convicciones e hice todos los esfuerzos a mi alcance para lograr un real avance hacia objetivos superadores.

Encontré en mis superiores, ministro de Defensa y presidente de la Nación, predisposición para apoyar mi acción. El trato cotidiano nos permitió un fructífero acercamiento para solucionar los complejos problemas que se presentaban. El principal era el cumplimiento de la decisión presidencial de los juicios, que requirió medidas especiales para que no se transformaran en enjuiciamiento a las instituciones. No era tarea fácil ni tampoco asumida y comprendida en el ámbito civil, así como en determinados sectores castrenses. Prueba de ello fueron los conflictos sediciosos que se produjeron.

Nuevamente vivimos hoy problemas similares a los que hace 20 años debí enfrentar. Analizar los por qué llevaría un largo espacio del que no dispongo, pero los esfuerzos que se han hecho y que se hacen en esa dirección reflejan a menudo una sola cara de la verdad: la que conviene a una determinada concepción ideológica. Es bueno que se conozca el pasado, pero las revisiones no sirven si no son objetivas y equilibradas.

Estoy convencido de que la responsabilidad de todos los argentinos, gobernantes y gobernados, es aportar los esfuerzos de los que somos capaces para construir el futuro de nuestra Patria, y de que

ello sólo será posible si estamos dispuestos a no desconocer nuestro pasado pero decididos también a la decisión de no ser sus eternos prisioneros.

Las Fuerzas Armadas, desde el regreso al estado de derecho, han dado muestras de estar ajustadas a esta conducta. Han participado en operaciones de mantenimiento de la paz, y han prestigiado a nuestro país por su comportamiento y, a pesar de contar con escasos recursos presupuestarios, no dejan de avanzar en los aspectos cualitativos. En el marco interno, su conducta ha sido el respeto al orden institucional. Ejecutan permanentemente un aporte para la consolidación de nuestro sistema político y la filosofía de vida democrática que, afortunadamente, constituye hoy parte del acervo cultural argentino. Por tal motivo, por pertenecer a ellas, me siento hoy más que nunca honrado por mi condición de soldado.

El autor es general de división (r) y comandó el Ejército en los primeros años de la democracia.

Más cerca del reencuentro con lo que perdimos

Por Estela de Carlotto. Para LA NACION

Han pasado 20 años de gobiernos constitucionales, el período democrático más largo de la historia argentina. Y el pensarlo nos retrotrae al lejano pasado, ya que desde 1930 las Fuerzas Armadas interrumpieron permanentemente el poder político legalmente constituido.

Los de nuestra generación toleramos, algunos más que otros, esta constante usurpación, casi acostumbrándonos a tal avasallamiento como si nada. Pero felizmente ahora, también, nos acostumbramos a vivir y disfrutar en democracia. A pensar libremente, a participar en el apoyo o el disenso en todo aquello que nos concierne.

Por supuesto, esta etapa no es calificable aún como una real democracia, ya que sufrimos pobreza, desocupación, falta de techo, deterioro de la educación y la atención sanitaria. Ello como consecuencia de un plan de entrega económica que llevó adelante la dictadura militar (1976-1983) y las políticas equivocadas de los gobiernos posteriores.

En estos 20 años, hemos crecido como sociedad porque hemos aprendido a participar, a manifestar, a ser contestatarios, a brindar solidaridad, a meternos en la historia para así modificar los actos de atropello al pueblo. Fuimos y somos la resistencia a un sistema de opresión e injusticia, y pretendemos imponer la igualdad social que nos merecemos. Todo ello con el claro propósito de formar parte del Soberano.

Y en estos nuevos tiempos en que los acres de una primavera política nos hacen soñar con lo que parecía imposible, vemos que se hará realidad el clamor de Verdad y Justicia.

Y entonces las Abuelas podemos imaginar que los reencuentros con los nietos que nos robaron serán posibles al más corto plazo.

La autora es presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

La deuda política de la democracia

Por Beatriz Sarlo. Para LA NACION

El año 1983 fue, para quien pueda recordarlo bien, el de la política. La dictadura se estaba yendo cuando decidió dictar una ley de amnistía que incluía sus propios crímenes. El candidato del Partido Justicialista, Italo Luder, declaró que esa ley, patética e ilegítima, podía tener legitimidad y, en consecuencia, que esos crímenes quedarían sin juicio. El candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, la desconoció, y reafirmó su compromiso de juzgar a los miembros de los tres juntas militares que habían gobernado desde 1976. Es sabido que el peronismo perdió las elecciones y que esa derrota marcó el comienzo del proceso llamado "renovación" partidaria, del que saldrían nuevos dirigentes de proyección nacional o local, entre ellos, Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Carlos "Chacho" Alvarez, protagonistas de los años que siguieron.

Pero lo que luego se reprochó a Alfonsín como un signo de impotencia y fracaso fue una creencia de amplias mayorías. Con la democracia se come, se cura, se educa, dijo Alfonsín y, al decirlo, expresaba a sus votantes. Por supuesto, la democracia no podía soportar por mucho tiempo esa carga de expectativas, porque estaba la deuda externa y no era sencillo levantar las persianas de las fábricas (según una fórmula también de época). Los primeros años de la transición tuvieron el signo de esas expectativas dirigidas a un sistema que no podía cumplirlas y a un presidente que se había equivocado, junto con una mayoría, al creer que las cosas iban a ser más fáciles. La Argentina de la segunda mitad del siglo XX había fracasado.

La transición demostró que no se podía volver atrás, a una Argentina que la dictadura había clausurado. No se podía volver atrás en ningún aspecto. Cuando el juicio a las juntas fue cerrado por las leyes de obediencia debida, punto final y el indulto, las cosas no volvieron simplemente hacia atrás sino que tomaron, en la sociedad y también en la justicia, nuevos caminos. Lo que hoy está sucediendo en el campo de los derechos humanos es una prueba de que a partir del indulto el reclamo de justicia iba a encontrar estrategias diferentes. El indulto no significó un retorno del pasado, porque los reclamos de justicia estaban incorporados a lo que podía exigirse. Y, aunque durante buena parte de los años menemistas, pareció que se imponía el signo de una pacificación sin memoria, cuando en 1996 se conmemoraron los veinte años del golpe de Estado, miles de personas, muy jóvenes, estudiantes con sus profesores y maestros, familias enteras, se volcaron a la plaza con las consignas "nunca más" y "verdad y justicia". Lo que parecía desvanecido en el sueño hipnótico del primer tramo de los 90 volvía a hacerse visible. Como hoy, cuando la cuestión no estaba en la primera línea y bastó la acción del Presidente para que eso, mitigado por las consecuencias de la crisis, volviera a activarse.

No hay entonces, en ese punto, regreso al pasado. Pero tampoco hay regreso a aquella Argentina de la relativa abundancia de hace cuatro décadas; no hay regreso a esa Argentina con empleo seguro, cuyos obreros, en los primeros años setenta, combatieron por mejores condiciones de trabajo en sindicatos fuertemente ideológicos, donde las luchas por la democracia y la participación no eran la bandera sólo de pequeños grupos. Con lo que quedó, otro país, en condiciones internacionales diferentes, deberá construirse.

Lo que quedó de los años noventa hace aún más cruel la equivocación de Alfonsín cuando decía, en 1984, que muy pronto la Argentina iba a ocupar en el mundo el lugar que había perdido. A ese lugar no se vuelve, entre otras cosas porque el mundo ha cambiado y ese lugar ya no existe. Pero

también porque la Argentina ha cambiado en una dirección impensada: del capitalismo industrial a la criolla queda el cinturón de galpones abandonados que rodean Buenos Aires o el corredor Rosario-San Nicolás; quedan un puñado de fábricas ocupadas donde emerge algún experimento social moralmente valioso, pero no sale de ellas la recuperación de una estructura productiva. Y, sobre todo, queda una nación socialmente desintegrada. Una mayoría de votantes no quiso mirar ese país horrible cuando eligió a Menem por segunda vez.

Tocar fondo

En términos de lo que se llama dignidad nacional, la Argentina cínica de la corrupción y de una institución judicial manchada por todas las suspicacias tocó fondo. Cuando cayó De la Rúa era difícil prever cómo se podía seguir adelante. Hoy, esos meses de pesadilla parecen singularmente lejanos, esfumados por la novedad que trajo Kirchner al gobierno. Extraña paradoja: cuando se esperó casi todo, como en el comienzo de la democracia, se cumplieron pocas expectativas; y cuando ya no se esperaba casi nada, un fortalecimiento de lo político, encarnado en el Presidente, renueva las promesas.

¿Cuáles son las promesas cuyo cumplimiento podría definir nuestro futuro? Naturalmente, la construcción económica y la reparación social están en primera línea. Sin embargo, en estas dos décadas hemos aprendido que las cosas, buenas o malas, no pueden suceder de cualquier manera. Aprendimos que la moral es una dimensión principal de lo público y que la corrupción de la cabeza política pudre, de allí para abajo, todo. Por eso, como las cosas no deben suceder de cualquier manera, una promesa de la democracia, todavía incumplida, está en el centro. Lo estuvo, como una especie de grito de guerra, durante las jornadas de diciembre de 2001, cuando "que se vayan todos" expresó no un programa imposible, sino la rabia de una sociedad que, con razón, repudiaba a sus gobernantes. La política debió interpretar y dar forma a ese grito. Tardó en hacerlo. Dos años después, el nuevo presidente se da cuenta de cómo se traduce en términos políticos el grito de diciembre de 2001.

Pero la mayoría de quienes hubiera sido bueno que se fueran aún están y, en muchos casos, incólumes, ganando elecciones provinciales y alineándose detrás del Presidente, sin haber cambiado. La promesa incumplida es la de la reforma política. Ella es hoy más urgente que en 1984, porque entonces se empezaba un camino y hoy ese camino se ha recorrido en parte con resultados catastróficos: son más fuertes los caudillos y los feudos; es más eficaz la máquina política en la medida en que hoy es, casi, la de un solo partido fuertemente implantado en el territorio y que controla las redes asistenciales.

En 1984 todavía estaba por delante la reforma de la Constitución que hoy ya es pasado y ha dejado todas las cuestiones abiertas. En 1984, todavía se ignoraba cuál iba a ser el perfil del hiperfederalismo argentino. Hoy, en cambio, sabemos casi todo acerca de las consecuencias de una organización institucional donde se ha descentralizado hasta el absurdo la educación y se compartió una de las facultades centrales del Estado-nación, como es la emisión de moneda; donde las fuerzas de seguridad son incontrolables o responden de manera criminal a dirigencias regionales, como se vio en Catamarca y ahora en Santiago del Estero y Jujuy. Sabemos lo suficiente de un Senado que ha aumentado el número de sus miembros y puede obstaculizar y someter al mercadeo las decisiones del gobierno nacional; conocemos la sobrerrepresentación de algunos distritos electorales y también los cambios introducidos en leyes y constituciones provinciales, reformadas como si se tratara de edictos municipales.

La deuda es la reforma política, que incluye una reforma electoral y un compromiso que evite artefactos infernales como la ley de lemas y reelecciones indefinidas. Se podrá decir que no tiene la urgencia de la miseria y es cierto. Pero las tareas por venir no compiten sólo por su urgencia. Se trata también de que esa urgencia social obtenga los instrumentos políticos adecuados. En estos veinte años, unas pocas y cruciales intervenciones políticas permitieron que la Argentina siga existiendo como nación. De eso se trata.

Reformar el Estado, la asignatura pendiente

Por Carlota Jackisch. Para LA NACION

En la evolución de la vida de una especie, 20 años no significan prácticamente nada. En la vida de una persona es un lapso considerable de su existencia. En los procesos de desarrollo político son muchos los factores que inciden para poder evaluar lo transcurrido en dos décadas. A Hitler le bastaron doce años para destruir Alemania; Fidel Castro, con 44 años en el poder, sólo logró que un país relativamente próspero y corrupto se transformase en una sociedad muy pobre y en cautiverio.

Los argentinos podemos congratularnos por estos últimos veinte años, si nos comparamos con regímenes totalitarios, pero no tanto si tomamos como referencia las naciones desarrolladas del mundo que aúnan el bienestar económico de sus habitantes a las bondades de un estado de derecho liberal, austero y que asegure el pleno funcionamiento de las instituciones.

Como en las sociedades abiertas occidentales, durante todos estos años en la Argentina se eligieron democráticamente las autoridades. Hubo inclusive alternancia en el poder entre los partidos mayoritarios, la libertad de prensa rara vez fue avasallada (ojalá dure) y la defensa de los derechos humanos estuvo en la agenda de las distintas administraciones.

Ahora bien, las elecciones periódicas constituyen un aspecto esencial de la democracia, pero no pueden evitar que los gobiernos que de ellas surjan sean corruptos, ineficientes y dominados por intereses particulares. Por supuesto que no se desean gobiernos de esa naturaleza, pero esa naturaleza no los transforma en menos democráticos.

De allí la imperiosa necesidad del funcionamiento de las instituciones republicanas, para no tener que depender exclusivamente de la calidad del liderazgo, que es un bien escaso.

Un sistema democrático y republicano está compuesto por una serie de instituciones encargadas fundamentalmente de minimizar la discrecionalidad, de fijar reglas de conducta estrictas, respetuosas de las libertades individuales, que aumenten la previsibilidad de todos los actores sociales. También la previsibilidad de las medidas que toma el Estado en el cumplimiento de los contratos y en la aplicación transparente de la ley, basada en la justicia.

Para ello es condición necesaria limitar severamente el poder del Estado y asegurar el estricto cumplimiento de la división de poderes. Se trata de utilizar el famoso *divide et impera*, no desde el punto de vista de la estrategia del soberano sobre los gobernados, sino al revés, es decir, del pueblo con respecto al poder central: el resultado es el mismo. En otras palabras, sólo mediante la fragmentación del poder político y su limitación puede la sociedad resguardar su propia libertad e integridad.

Como ya sostuviera Samuel Huntington, es innegable que a medida que crece el poder del Estado se debilita la autoridad política de la sociedad. Este debilitamiento de la autoridad política se verá aún más incrementado en la medida en que se debiliten, ante la estima de la población, las instituciones como los partidos políticos, la justicia, los cuerpos deliberativos, y se fortalezcan grupos de todo tipo que, al amparo del Estado, transmitan presiones sectoriales susceptibles de generar crisis incontenibles de gobernabilidad si se les quita la prebenda otorgada. Es así como se produce la paradoja de que un Estado débil para cumplir con sus funciones esenciales -como son la defensa de los derechos individuales, el cumplimiento de los contratos y la preservación del orden y la seguridad

en la sociedad- acumule un poder inmenso porque vastos sectores de la población dependen de los recursos del Estado.

Actualmente, en la Argentina, un numeroso grupo de personas recibe un ingreso directamente del Estado. A partir de la revisión de las estadísticas oficiales y los resultados de las investigaciones de instituciones académicas referidas al tema, se pudieron estimar las siguientes cifras:

Si se consideran los sectores nacionales, provinciales, municipales y se le suman las universidades y la banca pública, con sus respectivos "contratados", aproximadamente 2.300.000 personas dependen del Estado. Además, hay que sumar los Planes de Jefas y Jefes de Hogar, más los residuales del Plan Vida, los relativos a Alimentación Básica y Huertas Populares, que suman cerca de 2.200.000. Así llegaríamos a un total de 4.500.000 empleados y desempleados cuyos ingresos dependen del erario público. Si a esto se agregan los 3.500.000 jubilados y pensionados, llegamos al pavoroso número de 8.000.000. El ingreso que recibe cada una de estas personas constituye el único o, al menos, una parte de los recursos totales del grupo familiar al cual pertenece. Por lo tanto, indirectamente, la dependencia del Estado se extiende a un número multiplicado de personas. Es cierto que, en algunos casos, se trata de remuneraciones muy reducidas, pero es una retribución por "hacer nada". En un país que prácticamente carece de inversión relevante y que se empobrece, esta política es sostenible sólo si cae el poder adquisitivo de esos ingresos, lo que augura potenciales conflictos graves y la continua pauperización. Por su parte, se generan hábitos mentales perversos en amplias capas de la población argentina, que esperan las migajas del Estado para sobrevivir. En estas dos últimas décadas este panorama se ha ido empeorando año tras año.

Si se tienen en cuenta estos datos, no debe sorprender el resultado de la recopilación efectuada por el Centro de Estudios Nueva Mayoría: "Sobre 19 elecciones de distrito que ya se han realizado, el oficialismo local ha ganado en 17 de ellas, confirmando el generalizado triunfo de los gobiernos provinciales, del partido que sean". Y, en particular, la referencia a las elecciones más recientes: "En el caso de Formosa, el gobernador obtiene su tercera elección consecutiva, cuando la provincia tiene el 78% de la población bajo el nivel de pobreza y el 93% de los niños en esta situación." Ello evidencia la decisiva importancia del clientelismo político en los sectores más pobres.

Propuesta inicial

Un Estado austero, que pueda dedicar sus esfuerzos a las funciones que, como tal, le competen, será un Estado fuerte cuyos sectores dirigentes vean su autoridad y su legitimidad revitalizadas.

Ante la magnitud que el problema ha alcanzado en nuestro país, se deben tomar decisiones. Una modesta propuesta para iniciar la impostergable tarea de reducir el gasto, al menos en el sector político, y festejar con decoro estos veinte años de democracia, es la siguiente.

Equiparar:

- 1) Las remuneraciones y beneficios adicionales de los senadores con los sueldos de Investigador Principal del Conicet (no me refiero al Max-Planck-Institut).
- 2) Los ingresos por todo concepto de los diputados nacionales a la remuneración de los profesores universitarios con dedicación exclusiva.
- 3) En el caso de los concejales, equipararlos a los sueldos básicos de los profesores de los colegios secundarios con el máximo legal de horas dictadas.

Puede parecer risible, pero la propuesta descansa sobre argumentos éticos difíciles de desdeñar. Esto, como parte de una reforma política integral que siempre se promete en las campañas electorales y, luego, no se pone en práctica.

¿Veinte años no es un tiempo suficiente para saber qué es lo que reclama la sociedad?

La autora es investigadora senior de la Fundación Friedrich A. von Hayek.